Hay debates perdidos de antemano, que se hacen para los convencidos. Zapatero se despidió del Congreso de los Diputados con uno de ellos, reivindicando que el giro político neoliberal de mayo de 2010 era el único posible, porque no había otra alternativa que el rescate, como les ha ocurrido a Grecia, Portugal e Irlanda. A excepción de la menguada izquierda (IU, ICV, BNG, y con matices, ERC), el resto de los partidos del arco parlamentario concuerdan con este análisis, aunque pusieran el énfasis en la tardanza, debilidad o incoherencia de las contrarreformas “voluntarias” emprendidas por el Gobierno como estrategia del mal menor **[1].**

Pero la opinión pública, sobre todo la base social de la izquierda, tiene una visión muy distinta, como ha puesto de manifiesto el desplome electoral del PSOE en las recientes elecciones municipales y autonómicas, así como la caída continua desde mayo de sus expectativas de voto en las encuestas: ya está a más de 14 puntos del PP. Por eso no es de extrañar que tras el debate del estado de la nación tanto Metroscopia como el CIS registraran que Zapatero había perdido el debate, aun cuando –para los encuestados— ni él ni Rajoy tenían alternativas: ninguno de los dos “transmite confianza”, y el debate fue percibido por la opinión pública como de “mero trámite”, “poco o nada interesante” **[2].**

En realidad, las encuestas sobran estos días en el Reino de España. Basta con asomarse a sus plazas para encontrarse con la indignación en carne y hueso de sus ciudadanos. El Movimiento 15 de mayo estuvo muy presente en los debates, obligando a los distintos portavoces a definirse sobre las características de la actual crtisis económica mundial, sobre las patologías de la vida económica española de las últimos décadas –que muchos, empezando por el presidente del Gobierno, parecían descubrir ahora—, y aun sobre la naturaleza misma de la democracia participativa. Bien puede, pues, decirse que los ecos del 15 M en la Cámara dieron pié a algunos de los momentos de mayor intensidad del debate.

La pretendida inevitabilidad del pretendido mal menor

La primera intervención de Zapatero fue la mejor exposición realizada hasta el momento sobre las consecuencias de la crisis económica y la política del Gobierno para salir de ella. La estrategia del mal menor fue explicada de manera clara, concisa y llena de datos. El hilo conductor fue, no solo su inevitabilidad, sino también la reivindicación de una preocupación social como seña de identidad del zapaterismo. El testamento político de Zapatero es, sin embargo, el acta de defunción del socio-liberalismo.

La cosa se resumía en tres ejes: cambio del agotado modelo productivo, fundado en el ladrillo y el endeudamiento privado; consolidación fiscal y austeridad pública; mantenimiento de la cohesión social. De lo que seguían tres grandes campos de “reformas”: el sector financiero, en especial de las Cajas de Ahorro; el marco laboral, con contención salarial y “flexibilización”; y la mejora de la productividad.

Tres campos de actividad “reformista”, tres enormes problemas. En primer lugar, la recapitalización del sector financiero a través de su apalancamiento en la deuda pública supone un trasvase sin precedentes al sector privado que no ha llevado aparejado el mantenimiento del crédito, ahogando la economía y provocando a su vez un aumento de la deuda pública por la reducción de los ingresos fiscales. En segundo lugar, la recuperación de la tasa de beneficio empresarial se ha concentrado en la contención salarial, y el aumento de la productividad, en la disminución de plantillas, reduciendo aún más una demanda de consumo ya exhausta por el endeudamiento privado familiar y empresarial. En tercer lugar, las políticas de consolidación y austeridad fiscal se han limitado al recorte de un gasto público que ya era uno de los mas bajos de la zona euro, aumentando los déficits estructurales, en especial del gasto social, en relación con la media de la UE, sin abordar el imprescindible aumento de los ingresos fiscales a partir de las rentas del capital, especialmente beneficiadas con la excusa del necesario relanzamiento de la inversión.

Cabría añadir un cuarto problema, oculto tras la “inevitabilidad” alegada. En ningún momento, desde el Ecofin del 9 de mayo del 2010, el Gobierno Zapatero ha cuestionado la orientación marcada por Merckel y el BCE en el tratamiento de la deuda soberana en la zona euro, que ha sido el principal agravante de la crisis económica en Grecia, Portugal e Irlanda y, colateralmente, de la presión en los mercados financieros sobre la deuda soberana española, a pesar de que tanto su volumen (69% del PIB) como el déficit fiscal (9,3% en el momento más alto, 6% a finales del 2011) se encontraban en la media de la eurozona. De hecho, el sector neoliberal del Gobierno y el Banco de España han utilizado sin cuestionar esta orientación para imponer a su vez una estrategia de austeridad neoliberal en el Reino de España aún más estricta que la exigida por la UE, estrategia que el sector socio-liberal, encabezada por Zapatero, ha intentado amortiguar en sus consecuencias sociales.

Este es el núcleo del problema. No fue Zapatero quien lo señaló, más allá de lamentar la falta de una gobernanza económica europea, sino el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, aunque para reafirmar de nuevo el carácter “inevitable” de la orientación seguida, porque ni el rescate –que sólo puede suponer un endurecimiento de las políticas de ajuste-, ni la salida del euro –que multiplicaría los efectos de la crisis- son alternativas, pontificó Erkoreka, recogiendo el apoyo agradecido de Zapatero por sus “argumentos”.

Pero ¿no hay ni ha habido desde el comienzo de la crisis en el verano de 2007 márgenes de maniobra ni políticas económicas alternativas en la eurozona? Como señaló de pasada Zapatero en una de sus réplicas, sí la hubo: fueron las políticas pseudokeynesianas puestas en práctica desde 2008, que, lejos de crear empleo directo y demanda, sirvieron para asegurar unos márgenes de beneficio al sector empresarial y bancario, confiando que se tradujeran en mayor inversión. Ha sido el continuo cambio de la correlación de fuerzas a favor de las rentas del capital, tanto en el Reino de España como a escala europea, lo que ha ido recortando sistemáticamente los márgenes de maniobra, garantizando una alta rentabilidad a los acreedores de bonos, hasta caer en la trampa de la deuda soberana impagable de Grecia y Portugal y su reestructuración, iniciada con el Plan Sarkozy.

El núcleo del testamento de Zapatero es, sin embargo, su legado social en este contexto. Es decir, el énfasis puesto en la buena fe de su socio-liberalismo como base de contención de la ofensiva neoliberal que el PP se propone llevar a la práctica con todas sus consecuencias. Zapatero lo concretó con inusual ardor estadístico: la extensión de las prestaciones sociales superior en un 60% a las existentes en 2004, incluyendo la ampliación de la cobertura del paro en más de 10 puntos; el aumento de las pensiones mínimas en un 27%; la multiplicación por dos de las becas; la creación de las ayudas para la dependencia. Todo ello resumido en una renta per cápita que habría aumentado durante estos siete años en un 17% (aunque se obvia que la desigualdad ha crecido aún más, y que el 10% de la población acumula el 37% de los ingresos).

Quizás nada exprese mejor la impotencia de este legado social ante la ofensiva neoliberal que la última de las medidas sociales anunciadas en el propio debate. Cuando existe un verdadero clamor popular que exige la posibilidad legal de la dación en pago de las viviendas para la clausura de las hipotecas impagadas –el principal problema que agobia y condena a la pobreza al sector más castigado por el paro—**[3]**, Zapatero anunció la extensión del límite de los ingresos no embargables por los bancos, después de subastada la vivienda, a 1.000 euros (1.200, en caso de existir familiares dependientes). Solución que evidentemente limita mínimamente la pobreza de los pobres con trabajo, pero que obvia el hecho de que la mayoría de los morosos hipotecarios lo son por que están en paro, ellos y/o sus cónyuges.

El nulo crédito que merece a la población este socio-liberalismo, enémiso recurso sacado de una chistera agotada, queda perfectamente reflejado en las encuestas. Pero es importante subrayar –y este es el debate pendiente en el PSOE— que no puede servir de base para ningún proyecto de reconstrucción de la izquierda, ni siquiera en su versión socialdemócrata más inofensiva, por su incoherencia manifiesta y por unos resultados que están a la vista de todos. Junto a una premeditada desmovilización de la izquierda social para evitar una polarización alentada por la derecha, ella sí movilizada en la calle, éste es el triste legado del zapaterismo, y lo que explica su hundimiento electoral.

Las elecciones como alternativa

Rajoy hizo algo más eficaz que ofrecer alternativas: acusó a Zapatero de ser una de las principales causas de la crisis por su falta de credibilidad (“ha perdido crédito hasta para las excusas”), y defendió que la única solución es el adelanto de las elecciones y la victoria del PP. Envolvió la formula en una nostalgia regeneracionista (“España esta muy mal”, “decadencia”, “permanente debate sobre su propio estado”…) para reivindicar su papel de cirujano, más que de “hierro”, de arcilla del pueblo: capaz de hacer “lo que hay que hacer”, y de llevar a cabo las reformas necesarias, sin más sucedáneos ni dilaciones.

El discurso de Rajoy estaba construido desde las encuestas de opinión, dispuesto a dar la razón a los convencidos y a exigir la inmediata dimisión de Zapatero. Pero su credibilidad parece estar, según las mismas encuestas, al mismo nivel que la de Zapatero. A la acusación de haber alentado el modelo de desarrollo insostenible de ladrillo y deuda, Rajoy se limitó a defender vagarosamente la “mejor herencia económica” de la democracia. Pero la carencia de alternativas sí debió de causar alguna desazón en el PP, que presentó tras el debate 15 resoluciones, con 87 medidas y tres proyectos de ley, básicamente con bajadas de impuestos y bonificaciones. Sólo fueron aprobadas las cuatro resoluciones que apoyaron los diputados socialistas.

El portavoz de CiU, Duran i Lleida, aunque coincidiendo con el PP en la necesidad de una rápida convocatoria de elecciones, sí abrió un debate sobre las políticas de salida a la crisis. Propuso un triple pacto: por el empleo (profundizando las contrarreformas laborales), para asegurar el crédito para las medianas y pequeñas empresas y para cubrir el déficit de las comunidades autonómicas, como la catalana, a través de la deuda pública. Además de defender el programa de recortes lineales de un 10% de la Generalitat de CiU, Durán propuso la reforma del sistema electoral para adoptar el modelo alemán. Por si había dudas sobre una posible aproximación al PP, Duran recordó las consecuencias del recurso presentado contra el Estatut de Catalunya y la falta de pactos de estado entre las dos principales fuerzas políticas.

Su defensa de la doctrina social de la Iglesia, que según él habría abrazado en su día el propio Partido Comunista italiano, fue seguida de un ataque al Movimiento 15 de mayo y de la expresión de nostalgia por tiempos venideros en los que la ciudadanía pueda volver a delegar sin más en sus representantes, sin síndromes “rojos” o “verdes”. Probablemente, no ha habido mejor radiografía de los fantasmas ideológicos de la derecha catalana actual, traumatizada aún por la jornada de lucha del 15 de junio en Barcelona, y de sus diferencias con la derecha españolista.

Correspondió de nuevo a Erkoreka volver a poner en evidencia lo limitado de la alternativa propuesta por el PP y CiU. En primer lugar, reafirmando que fuese quien fuese quien estuviese al frente del Gobierno, no tendría más remedio que aplicar la política económica impuesta por la Unión Europea. Pero que además, la historia de la legislatura, con 41 proyectos de ley validados, era la de una corresponsabilidad colectiva de toda la derecha con el PSOE en las medidas aplicadas, bien votando a favor como PNV, CiU o Coalición Canaria, bien absteniéndose como en el caso del PP.

La votación de las resoluciones tras el debate no hizo sino confirmar ese diagnóstico: por primera vez, el PSOE ganó las 90 que se realizaron, sin perder ninguna. El PNV vio aprobadas 13 de las 15 que presentó y Coalición Canaria todas las suyas. Quedaba así conformado el bloque que puede aprobar el presupuesto del 2012 el próximo diciembre, esencial para la aplicación de las contrarreformas neoliberales y para las que podría ser un obstáculo la extensión automática del presupuesto del 2011 en caso de adelanto de las elecciones.

El M 15 M y la naturaleza de la democracia

Además del enfoque casi exclusivo en la crisis, con la ausencia notoria de un debate sobre el País Vasco más allá de la mención alarmada a Bildu del PP, UPyD y UPN, el otro tema importante del debate del estado de la nación fue el fantasma del Movimiento 15 de Mayo.

Zapatero hizo mención a él en su primera intervención con lo que la prensa califica de un “guiño a la izquierda”, calificándolo de “fisiología, que no de patología” de la actual democracia española. Pero Duran i Lleida, empeñado en su particular defensa de lo que entiende por democracia representativa, del papel de los políticos y de una ciudadanía permanentemente desmovilizada obligó a Zapatero a volver a intervenir… para sumarse sin matices a una defensa de ese modelo en vigor.

Con ello hubiera acabado el debate sobre el 15 M, en un tono paleoorteguiano de condena a la rebelión de unas masas insuficientemente educadas en los mecanismos políticos de gobierno, que para el PP no es sino el sìntoma patológico de la decadencia nacional. Pero la intervención de Gaspar Llamazares, portavoz de IU, puso el dedo y echó sal en la herida cuando planteó si el cuestionamiento de la legitimidad del actual sistema democrático, razón de las movilizaciones del 15 de Mayo y de su exigencia de democracia real ya, no sería el resultado de la ruptura del propio contrato democrático que permite que un gobernante pueda aplicar una política, no ya distinta, sino completamente contraria al programa electoral con el que fue elegido, sin tener que dimitir o realizar una consulta a los ciudadanos. Y como subrayó, Zapatero no había dicho en todo el debate una sola palabra sobre la corrupción incrustada en las instituciones. Como ejemplo de las virtudes del actual modelo de democracia representativa puso a IU, que siendo la tercera fuerza en número de votos, esta condenada por la actual ley electoral a tener, con ICV, solo dos diputados. La única buena noticia es que, parafraseando a Camus, “los humillados ya no aceptan por mas tiempo la humillación”, y recuperó el debate regeneracionista para la izquierda: lo que critican los ciudadanos indignados del 15 M es precisamente la degradación corporativista y caciquil de la democracia y de la política.

Esperando a Rubalcaba

La metáfora utilizada por Llamazares de Zapatero como el capitán Akab hundiéndose con la ballena blanca de los mercados, ilustró la traición a la izquierda y a las políticas compartidas de la primera legislatura del zapaterismo. El portavoz de ERC, Ridao, convirtió esa traición en el eje de una intervención que transformó en programa propio la melancolía acrítica de ese período. Lo mismo ocurrió con la réplica de la portavoz de ICV, que lamentó no haber ocupado su escaño cuando el Govern Tripartit de Progrés catalán todavía no había sido abandonado a su suerte por Zapatero para pactar con CiU el Estatut. El BNG, con menos añoranzas de su alianza con el PSG en la Xunta Galega, hizo un repaso más fáctico de la crisis y de la necesaria respuesta de una izquierda política evanescente.

Zapatero sólo pudo contestar a sus antiguos aliados de izquierdas como Groucho Marx, que seguía compartiendo sus principios pero que ya le gustaría verles a ellos con la responsabilidad de gobierno en medio de la crisis. El circulo solipsista se cerraba así con la resignación ante la pretendida inevitabilidad de la estrategia del pretendido mal menor, el fin de un ciclo político y la aparente condena del centroizquierda a volver a repetirse a si mismo, esta vez bajo la batuta de Rubalcaba.

Después de meses de tensiones en la dirección del PSOE sobre la estrategia sucesoria, fracasado el papel de chivo expiatorio asignado inicialmente a Zapatero tras el hundimiento electoral de mayo, la tarea de reconstruir la alternativa electoral socialista al zapaterismo comenzó en el mismo debate del estado de la nación con el silencio de Rubalcaba y su ruptura posterior en el momento en que se votó la última resolución. El próximo 9 de julio está prevista la proclamación multitudinaria y pública del candidato “P. Rubalcaba”, en una especie de desliz freudiano del ZP.

El “yo, ya” de Felipe González, referido a una necesaria salida del gobierno de Rubalcaba candidato, fue rechazada tajantemente con un “no, gracias, no necesito consejos”, que demostró que el proyecto de reconstrucción de la alternativa socialista pasa no solo por superar el zapaterismo, sino también el felipismo de una buena parte del actual Gobierno. En el primer Consejo de Ministros, como portavoz del mismo anunció un paquete de medidas para aliviar la situación de hipotecados, ayuntamientos y empresarios, y recordó la existencia de 27 proyectos de ley elaborados y pendientes, que no podrán ser aprobados ya en esta legislatura, limitada a un otoño presupuestario. El comienzo de la campaña electoral y de la reconstrucción del PSOE chocará con los límites que imponga la nueva vuelta de tuerca de las políticas de ajuste en el debate presupuestario.

El margen de maniobra de Rubalcaba para limitar el alcance de la victoria del PP es bastante estrecho. No solo no tiene otro argumento de peso que el de que el “inevitable” ajuste sería aún mas duro con un Gobierno del PP, sino que hereda una erosión de credibilidad que las encuestas sitúan en 14 puntos de diferencia y que el Movimiento 15 M se encarga de amplificar con sus movilizaciones continuas.

El manifiesto de artistas e intelectuales –exzapateristas en su mayoría— pidiendo una reconstrucción de la izquierda, más allá del PSOE, es una de tantas señales indiciarias del convencimiento colectivo de que se han agotado las formas organizativas y políticas heredadas, algo que las dificultades de IU para rentabilizar el voto descontento de la izquierda, así como su difícil gestión posterior de ese voto en Extremadura, hacen aún más patente. Con el adiós de Zapatero se abre, esta vez sí, inevitablemente, un nuevo ciclo para la izquierda en el Reino de España.

NOTAS: [1] Las actas del debate pueden consultarse en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_256.PDF y http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_257.PDF
[2]
El País, “Rajoy ganó el debate del estado de la nación por cinco puntos” , 30-6-2011, (

http://politica.elpais.com/politica/2011/06/30/actualidad/1309440126_034789.html
) y “Rajoy ganó el debate del estado de la nación, según el CIS”, 2-7-2011, (
http://www.elpais.com/articulo/espana/Rajoy/gano/debate/estado/nacion/CIS/elpepiesp/20110702elpepinac_7/Tes
). Esta visión negativa del debate del estado de la nación –junto con los presupuestos, el más importante de la vida parlamentaria- no hace sino reforzarse de año en año. Según el CIS, el verdadero ganador del debate fue Durán i Lleida (CiU), con un 33,3%, lo que también es un indicio de la preocupación de importantes sectores de la pequeña y mediana burguesía por el ahogo crediticio que han provocado las políticas de austeridad.

[3]

En la reciente encuesta de opinión de Metroscopia sobre el Movimiento 15 M, queda claro que más de un 64% de la población simpatiza con el Movimiento; que cerca del 80% cree que el Movimiento “tiene razón”; y el 63% apoya la exigencia de la dación en pago como medio para librarse de una hipoteca impagable.